



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

REFERENCIA: PROCESO ESPECIAL DE FUERO SINDICAL –
ASUNTO: APELACIÓN AUTO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
DEMANDANTE: BIMBO DE COLOMBIA S.A.
DEMANDADO: MIGUEL ALEJANDRO MONTES ROMÁN
SINDICATO: SINALTRABIMBO SUBDIRECTIVA COPACABANA
RADICADO: 050883105 002 2023 00515 01
ACTA: 97

La Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por las Magistradas **ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, ADRIANA CATHERINA MOJICA MUÑOZ y MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA** procede pronunciarse en virtud de la solicitud de aclaración realizada por la parte demandante respecto de la providencia proferida el pasado 10 de noviembre.

A continuación, la Sala previa deliberación sobre el asunto, como consta en el **acta 97** de discusión de proyectos, adoptó el presentado por la ponente, doctora Ana María Zapata Pérez, el cual quedó consignado en los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES

El **10 de noviembre de 2023** esta Sala se pronunció sobre el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte demandada y del sindicato en contra del auto de primera instancia que no decretó la declaración de parte del presidente de SINALTRABIMBO ni la exhibición de documentos.

Con memorial del **17 de noviembre de 2023** la parte demandante solicita aclaración de la providencia, así:

- En primer lugar, con relación a la declaración de parte, dice que la Sala resolvió que ésta es procedente por ser un medio de prueba autónomo e independiente del interrogatorio de parte y, por lo mismo, admisible conforme las reglas del Código General del Proceso.

Sin embargo, no era ello lo discutido en el auto y el recurso, señalando que no fue aquella la razón por la cual el *a quo* denegó la prueba.

Que en ningún momento del juicio se puso en duda por las partes o por el juez que la declaración de parte fuera autónomamente procedente como prueba, no obstante, el juez la negó por ser impertinente a la luz de la fijación del litigio. Y que, en tal sentido, la declaración de parte del Presidente de la organización sindical se mostraba **no solo impertinente sino innecesaria** (motivo por el cual no fue decretada), dado que el fuero sindical ya estaba reconocido por la empresa (razón por la que se inició el proceso judicial) y los hechos constitutivos de una justa causa no son del resorte del sindicato sino del trabajador mismo.

Señala así, que el auto del Tribunal que ordena decretar y practicar la prueba de declaración de parte no se ocupó del verdadero fondo de la discusión, referido a la pertinencia y necesidad de la prueba, que fueron los motivos por los cuales se negó la prueba en primera instancia.

- En segundo lugar y con relación a la exhibición de documentos, dice que el Tribunal señaló que se cumplían los requisitos para su decreto y práctica, pero no reparó en que los documentos cuya exhibición se solicita deben ser necesarios, pertinentes, idóneos y conducentes, y que, además, estuvieran en poder de la demandada, manifestación que es necesaria dentro del pronunciamiento judicial.

2. CONSIDERACIONES

Para efectuar el análisis, debe partirse de la disposición normativa aplicable consagrada en el Código General del Proceso:

ARTÍCULO 285. ACLARACIÓN. **La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció.** Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutive de la sentencia o influyan en ella.

En las mismas circunstancias procederá la aclaración de auto. La aclaración procederá de oficio o a petición de parte formulada dentro del término de ejecutoria de la providencia. [...]
(Negrita propia)

Es claro entonces que la providencia proferida el pasado **10 de noviembre de 2023** no es revocable ni reformable por esta Sala de Decisión y **solo podrá ser aclarada si contiene conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda**, siempre que estén contenidas

en la parte resolutive o influyan en ella. Así, se advierte la improcedencia de lo solicitado por las siguientes razones:

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66A del CPTSS, el principio de consonancia consiste en que, entre la decisión de segunda instancia y el objeto del recurso de alzada, debe existir plena correspondencia, lo que significa que, por regla general, al juzgador al resolver el recurso le está vedado apartarse de las materias que le propone el apelante (CSJ SL5622-2014 y CSJ SL2764-2017, entre otras). Así, el Tribunal debe sujetarse a los temas específicos y debidamente sustentados en la apelación contra la decisión de primera instancia, pues no tiene competencia para resolver otros aspectos ajenos a la relación jurídico procesal, sino estrictamente aquellos controvertidos por las partes en el recurso vertical (CSJ SL2172-2022).

En el auto que es objeto de solicitud de aclaración se dijo en los antecedentes:

“El pasado **19 de septiembre de 2023**¹ el Juez se abstuvo de decretarlas, y para tomar estas determinaciones indicó.

Frente a la prueba de **DECLARACIÓN DE PARTE** argumentó que con esa figura se busca es la confesión sobre ciertos hechos, por lo tanto, no es posible que la misma parte la solicite. Respecto a la **EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS** adujo que quien la solicitó lo hizo de manera anti técnica, porque no afirmó cuáles son los hechos que pretende demostrar, conforme lo exige el artículo 266 del CGP. Y agrega, que entre los documentos que pretende la parte sean exhibidos hay un video, que fue decretado como prueba y reposa en el proceso, agregando que, “en lo demás, la carga de la prueba recae en la demandante quien debe demostrar la existencia de esas causas, pues serán ellos los que deben demostrar si en esa política de datos cumplieron con esa situación.”

Revisada nuevamente la audiencia de primera instancia en la etapa de decreto de pruebas, - carpeta de primera instancia, archivo 11 video 2, minutos 31 y 45, respectivamente -, encontramos total similitud con lo planteado en el referido auto. Fue atendiendo a esos argumentos más los expuestos por la apoderada del demandado y de la organización sindical en el recurso, que en esta instancia se plantearon y resolvieron los problemas jurídicos: *“Pues bien, la competencia de la Sala está dada por las materias del recurso de apelación, por lo que el **problema jurídico** a resolver se contrae a determinar si de acuerdo con lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico, resulta procedente decretar las pruebas solicitadas por la apoderada de MIGUEL ALEJANDRO MONTES ROMÁN y de SINALTRABIMBO SUBDIRECTIVA COPACABANA relacionada con la **exhibición de unos documentos y la declaración del Presidente de la Organización Sindical** vinculada al proceso”*

¹ CARPETA PRIMERA INSTANCIA – ARCHIVO 11 -

En la solicitud de aclaración se afirma que la decisión adoptada por el A quo al no decretar la declaración de parte del Presidente de la organización sindical se sustenta en que la consideró **impertinente e innecesaria**, pero tal como se ha indicado, el argumento para denegar la prueba fue otro distinto: Que con tal prueba lo que se busca es la confesión sobre ciertos hechos y esto le llevó a considerar que no es posible que la misma parte la solicite. Y es justamente ante esa tesis esbozada en la primera instancia que esta corporación efectuó el análisis para concluir sobre su procedencia en los términos definidos.

Y el memorialista expresa que en la providencia se ha debido efectuar una manifestación relacionada con que los documentos cuya exhibición se solicita deben ser necesarios, pertinentes, idóneos y conducentes. Pues bien, en relación con este aspecto baste señalar que esta corporación al momento de efectuar el análisis en el marco del principio de consonancia resolvió los argumentos de alzada teniendo en cuenta lo decidido por el A quo, señalando expresamente en la providencia, lo siguiente:

“Pues bien, para esta corporación es claro que esta figura no puede convertirse en una herramienta para corregir negligencias en el cumplimiento de las cargas procesales que tienen las partes; pero verificada la actuación en los términos analizados, **se advierte que se acredita con suficiencia que en este caso se han expresado los hechos que se pretenden demostrar, haciendo referencia incluso al hecho de que se trata de pruebas que se procuraron obtener directamente de la activa de manera infructuosa; identificándose además, a partir de los argumentos esbozados en la contestación, la idoneidad, pertinencia y conducencia de los documentos pedidos.**” (negrillas fuera de texto)

Es así como, tras advertir que con los documentos se busca probar los hechos en que la pasiva funda su defensa, se encontró la idoneidad, pertinencia y conducencia de los documentos solicitados; siendo claro que el artículo 266 del CGP² solo exige como requisito para el decreto de la prueba, que la parte afirme que el documento se encuentra en poder de la llamada a exhibirlos, y en esos términos se hizo la solicitud. Fue así, como al encontrar satisfechos los requisitos establecidos en nuestro ordenamiento y que fueron claramente explicados, la Sala revocó la decisión del a quo.

² “Quien pida la **exhibición expresará los hechos que pretende demostrar y deberá afirmar que el documento o la cosa se encuentran en poder de la persona llamada a exhibirlos, su clase y la relación que tenga con aquellos hechos.** Si la solicitud reúne los anteriores requisitos el juez ordenará que se realice la exhibición en la respectiva audiencia y señalará la forma en que deba hacerse.

Cuando la persona a quien se ordena la exhibición sea un tercero, el auto respectivo se le notificará por aviso.

Presentado el documento el juez lo hará transcribir o reproducir, a menos que quien lo exhiba permita que se incorpore al expediente. De la misma manera procederá cuando se exhiba espontáneamente un documento. Si se trata de cosa distinta de documento el juez ordenará elaborar una representación física mediante fotografías, videograbación o cualquier otro medio idóneo”.

Subraya fuera de texto

No se observa entonces que la providencia emitida por esta corporación **contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda** en la parte motiva, ni mucho menos en la resolutive. Lo que se advierte es que lo que pretende el apoderado de la activa con su solicitud es que se modifique la decisión adoptada en la providencia, pero la Sala carece de competencia según el artículo 285 del CGP.

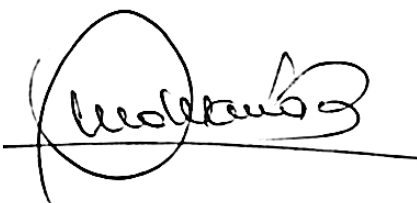
3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Sexta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECIDE:**

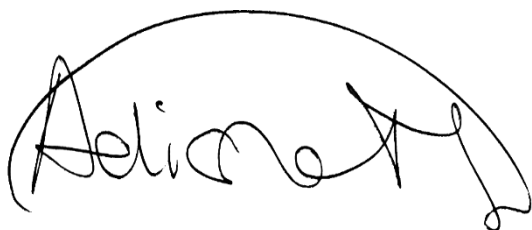
PRIMERO: Denegar la solicitud elevada por la parte actora.

Lo anterior se notifica por ESTADOS. Se da por terminada la audiencia y se firma en constancia por los que en ella intervinieron.

Las Magistradas,



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



ADRIANA CATHERINA MOJICA MUÑOZ



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -
HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N
203 del 27 de noviembre de 2023

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>